



Argentina: el Estado y los medios

MIRTA VARELA

Durante los dos primeros años de la dictadura militar (1976-1983) se concentra el mayor índice de violencia contra el periodismo de toda la historia argentina. Sin embargo, los mecanismos de censura se habían gestado a lo largo de varias décadas y cabe preguntarse qué aspectos siguieron vigentes *a posteriori*, así como las secuelas de ese período en el ejercicio del periodismo hasta la actualidad. El asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997 fue un punto de inflexión para la libertad de expresión durante un gobierno democrático. En 2009, fue promulgada la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazó la legislación de la última dictadura y colocó a los medios en el centro del debate político de los últimos años. No obstante, el periodismo está lejos de alcanzar una autonomía profesional deseable.

Palabras clave: Periodismo, censura, libertad de expresión, legislación audiovisual, Argentina.

Entre 1975 y 1980 más de ciento veinte periodistas fueron detenidos y desaparecidos o asesinados en Argentina.¹ Más específicamente, durante los dos primeros años de la dictadura militar que tomó el poder entre 1976 y 1983, se concentra el mayor índice de violencia contra el periodismo que haya tenido lugar en toda la historia del país. A partir de esas cifras, a las que debería añadirse un número significativo de exilios forzados y de listas negras, no resulta difícil deducir los niveles de censura y atentados a la li-

¹ El listado de periodistas detenidos–desaparecidos puede consultarse en <http://utpba.org/noticia/listado-completo-de-periodistas-detenido-desaparecidos-y-asesinados#.Vk9gHnYvflU>.

MIRTA VARELA es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Profesora Titular de la Cátedra de Historia de los Medios, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).



bertad de expresión que caracterizaron ese período. El Comunicado núm. 19 de las Fuerzas Armadas fue explícito al determinar «que sea reprimido con pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales». La interpretación de esta norma quedaba sujeta a la arbitrariedad de las Fuerzas Armadas y no faltaron los casos en que la desaparición y el asesinato reemplazaron la reclusión que enunciaba el comunicado militar.

Si la ecuación entre dictadura y violencia es evidente, surgen asimismo algunos interrogantes respecto de los modos específicos que adoptaron sus consecuencias en el periodismo.² En primer lugar, es importante considerar que los mecanismos de censura se habían gestado a lo largo de varias décadas en Argentina y contaban con agentes e instituciones en funcionamiento en el momento de concretarse el golpe de Estado. Los gobiernos dictatoriales signaron la historia argentina del siglo XX: entre 1930 y 1976, se sucedieron seis golpes de Estado exitosos, además de otros intentos frustrados, y la coerción sobre los medios opositores se convirtió en una práctica corriente aún durante algunos gobiernos democráticos en los que la libertad de expresión fue cuestionada. Las dos primeras presidencias del general Juan D. Perón entre 1945 y 1955, por ejemplo, se caracterizaron por la promoción de un sistema de medios afín al gobierno que sirvió como sostén para una prolífica propaganda oficial y —como contrapartida— la intervención directa o indirecta de los medios opositores. Se trató, sin embargo, de una política que diferenciaba el rol de los propietarios y el de los trabajadores que fueron beneficiados con la promulgación del *Estatuto del periodista*. El tercer gobierno peronista (1973-1976), por su parte, estatizó los canales de televisión privados, una medida de la que se beneficiaron los militares luego del golpe de Estado. En síntesis, el Estado intervino de múltiples maneras en la historia de los medios en Argentina, sin embargo, lo ocurrido durante la última dictadura militar, está lejos de tratarse de un simple cambio de escala.

En segundo lugar, la relación entre actividad profesional, militancia política y desaparición o muerte de los periodistas durante la última dictadura no siempre resulta sencilla de establecer o distinguir. Si los canales de televisión dependían directamente del poder militar, la prensa gráfica apoyó casi

² Sobre el rol de la prensa durante la dictadura puede verse: Blaustein, E.; Zubieta, M. (1998), *Decíamos ayer: la prensa argentina bajo el Proceso*. Buenos Aires: Colihue. Saborido, J.; Borrelli, M. H., coords. (2011), *Voces y silencios: la prensa argentina y la dictadura militar [1976-1983]*. Buenos Aires: Eudeba. Sobre el rol de los medios de comunicación: Varela, M. (2001), «Los medios de comunicación durante la Dictadura: silencio, mordaza y optimismo», en revista *Todo es Historia*. Buenos Aires, núm. 404, marzo 2001, pp. 50-63.

unánimemente el golpe de Estado. De manera que, salvo escasísimas excepciones entre las que se ha destacado el periódico editado en inglés *Buenos Aires Herald* —que hizo lugar en sus páginas a las denuncias de *habeas corpus* de los familiares de víctimas de la represión estatal— no hubo espacio periodístico hegemónico para la disidencia. Lo cual indica que la violencia no fue una consecuencia directa del periodismo durante esa etapa, sino del trabajo periodístico anterior al golpe o de la militancia política de los periodistas que, en muchos casos, incluía la participación en organizaciones armadas. Esto explica que muchas muertes de periodistas tuvieran lugar en 1975, un año antes del golpe militar.³

De esta manera, la relación entre actuación profesional y violencia política ha sido motivo de múltiples controversias sobre ese período de la historia argentina. Por un lado, existe un cierto consenso acerca del modo en que la politización de la literatura y el arte durante los años sesenta culminó, en algunos casos, en el abandono de la escritura y el periodismo por la lucha armada. Jorge Masetti, fundador de la Agencia Cubana Prensa Latina, desapareció en 1964 mientras formaba parte de un grupo guerrillero guevarista. Si bien su desaparición está relacionada con su participación en la lucha armada, la actuación de Masetti como periodista resultaría difícil de escindir de su acción política. En el mismo sentido, durante una manifestación en repudio de la visita de Nelson Rockefeller a Buenos Aires en 1969, tiene lugar el asesinato de Emilio Jáuregui que formaba parte del Sindicato de Prensa. Durante la última dictadura militar, la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh se convirtió en un caso emblemático. Después de haber apoyado el golpe de Estado contra Perón en 1955, Walsh se adhiere a las organizaciones armadas peronistas FAP-Montoneros a principios de los años setenta. Sus libros de no ficción sobre casos de violencia política en esa década dan cuenta de esta radicalización que concluye en la organización de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla) en 1976. Walsh desapareció un año después del golpe de Estado. Si fue una víctima de la dictadura militar a causa de su actuación periodística o a causa de su participación en organizaciones armadas es una pregunta que ha recibido diferentes respuestas.

En tercer lugar, es importante destacar que algunos acontecimientos noticiosos como el Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas en 1982 colocaron la situación de la prensa argentina en la agenda internacional y algunos medios como *Le Monde* aprovecharon la ocasión para reclamar por los periodistas desaparecidos en Argentina. La presión de organismos internacionales fue crucial, por ejemplo, para la liberación de Jacobo Timerman en 1980. Timerman había fundado las revistas *Primera Plana* y *Confirmado* y, si bien su periódico *La Opinión* tuvo una posición favorable al golpe de



³ Salomone, F. (1999), *Maten al mensajero: periodistas asesinados y desaparecidos desde Mariano Moreno hasta José Luis Cabezas*. Buenos Aires: Sudamericana, adjudica varias muertes de periodistas a la Triple A, un grupo armado paraestatal que funcionó desde antes del golpe militar.

Infoamérica

Revista Iberoamericana de Comunicación



Estado, fue secuestrado en 1977 por las Fuerzas Armadas junto con Enrique Jara, subdirector del diario, acusado de asociarse con la organización Montoneros.

Por último, cabe preguntarse qué secuelas dejó este período en el ejercicio del periodismo durante los años que siguieron y hasta la actualidad. De manera general, resulta difícil establecer en qué medida los mecanismos de censura y autocensura continuaron aplicándose en la Argentina a partir del fin de la dictadura en 1983. Pero de manera determinante, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997 significó un antes y un después para la libertad de expresión en el país durante un gobierno democrático. Cabezas trabajaba para la revista *Noticias* donde publicó fotos del empresario Rodolfo Yabrán, relacionado con la corrupción política y cuyo rostro permanecía oculto para la opinión pública. El cuerpo de Cabezas apareció calcinado y su asesinato, descrito como mafioso por los macabros detalles que lo rodearon, fue objeto de múltiples reclamos ciudadanos y forzó a cambios de figuras en el gobierno nacional. Otro tipo de límite a la actuación periodística pudo constatarse durante la represión a las manifestaciones que tuvieron lugar en 2001, en las que las denuncias de violencia contra periodistas se multiplicaron.⁴

En 2009 fue promulgada la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazó la legislación vigente desde la última dictadura y que colocó a los medios en el centro del debate político de los últimos años. La tensión con los medios opositores caracterizó el gobierno de Cristina Fernández que acusó a los diarios *Clarín*, *La Nación* y *La Razón* de complicidad con la dictadura en delitos de lesa humanidad con el objetivo de apropiarse de la empresa *Papel Prensa*. Este enfrentamiento tuvo un punto culminante cuando el Jefe de Gabinete presidencial, Jorge Capitanich, en un acto de violencia simbólica y material, rompió un ejemplar del diario *Clarín* en una rueda de prensa por el modo en que el periódico estaba cubriendo la muerte del fiscal Alberto Nisman, que había denunciado a la presidenta por encubrimiento en el caso del atentado a la AMIA.⁵ Durante el gobierno de Cristina Fernández, los medios públicos funcionaron como medios gubernamentales y algunos medios privados fueron financiados mediante publicidad estatal. La dificultad para distinguir la opinión de los periodistas de la política editorial de los medios para los que trabajan también ha caracterizado este último período. En este sentido, las presiones a la libertad de expresión adoptan nuevas aristas en la Argentina reciente donde, si bien los límites a la palabra no alcanzan, afortunadamente, los ribetes dramáticos descritos para otros períodos, el periodismo está lejos de alcanzar una autonomía profesional deseada.

4 Periodistas. Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (2001), *Ataques a la prensa: Informe 2001*, Buenos Aires: Planeta.

5 La AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) sufrió un atentado en 1994 en el que fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. El fiscal Nisman era el encargado de investigar el caso que permanece impune, al igual que el atentado contra la Embajada de Israel en 1992, donde perdieron la vida 22 personas.

ble. Si las cifras de circulación de diarios y revistas bajaron abruptamente durante la dictadura, probablemente por la falta de credibilidad de una prensa censurada, cabe preguntarse cuál será el saldo de un período de partidización de la prensa en el que la veracidad de los medios y de los periodistas⁶ han sido puestas en cuestión por los propios medios y por los más altos funcionarios del Estado.



⁶ Entre los numerosos libros sobre periodistas editados durante los últimos años en Argentina, algunos presentan denuncias graves que afectan la credibilidad y honestidad de algunas figuras. Tal es el caso de *Doble Agente. La biografía inesperada de Horacio Verbitsky* (Sudamericana, 2015) del periodista Gabriel Levinas. Allí, Levinas acusa a Verbitsky, periodista del diario *Página 12*, devenido oficialista durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), uno de los organismos más importantes en temas de derechos humanos, de haber colaborado con la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar.

día mundial de la libertad de prensa 2016



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



Cátedra UNESCO
de Comunicación



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

**Centre
Pompidou
Málaga**

#LibertadPrensa2016

martes, 26 de abril, 12 horas
centro pompidou
muelle 1 - puerto de Málaga